

# Crecientes desequilibrios y escasez de confianza

■  
La actividad económica enfrenta un período de estancamiento cuyo inicio se remonta a noviembre.

■  
En la fuerte desaceleración del crecimiento ha incidido el contexto internacional y la caída de la producción agrícola por falta de lluvias.

■  
No obstante, el factor gravitante para explicar el cambio de escenario es el efecto de las medidas adoptadas desde octubre.

**T**ranscurrida la primera mitad del año, el balance de la economía del país arroja una fuerte desaceleración de la actividad económica acompañada de un nivel de inflación en torno al 25% anual de acuerdo a estimaciones privadas.

El freno en la actividad sobrepasa la mayoría de los pronósticos de fin de año. En la actualidad, se encuentra estancado y con leve tendencia a la baja desde los niveles records registrados en el 2011. Esta situación es reflejada por los índices oficiales. De ellos, uno de los que mejor se aproxima a la medición de PBI es el estimador mensual de actividad económica (EMAE) elaborado por el INDEC. A partir del índice se construye un indicador de tendencia de largo plazo, el cual revela que desde noviembre pasado la economía se ha estancado (desde este mes, el indicador se encuentra en torno a 197,6 puntos). Cabe agregar que para ubicar una evolución similar del mismo índice, habría que remontarse a octubre del 2008, punto de partida de la crisis financiera internacional con origen en Estados Unidos. Desde este mes hasta mediados del año siguiente, el indicador exhibió una tendencia a la baja anticipando la fuerte caída de la tasa de crecimiento observada en el 2009. Esta similitud representa una señal temprana que podrían estar indicando el riesgo de inicio de un proceso recesivo y que en términos técnicos se define como la disminución del PBI durante al menos dos trimestres consecutivos.

Entre las explicaciones que se han señalado sobre el deterioro de la situación general se ha mencionado el impacto del contexto internacional. Las vinculaciones del país con el resto del mundo se ven reflejadas en el balance de pagos el cual representa un registro completo de las transacciones realizadas con residentes en el exterior. En el caso de Argentina, debido a su escasa integración con el mercado de capital internacional, los efectos del cambio de contexto deberían reflejarse en la cuenta de mercancías, a través de variación en los ingresos por exportaciones. En los últimos meses, el desempeño exportador se ha visto afectado por factores externos, destacándose la desaceleración del crecimiento de Brasil, la depreciación del real y la crisis de los países integrantes de la Unión Europea. De acuerdo a datos oficiales, el balance de los primeros cinco meses del año con respecto a igual período del año anterior arroja un nivel de exportaciones levemente creciente (+1%). Los sectores más afectados han sido el complejo sojero (granos, harinas y aceite) con una reducción de montos de U\$S 800 millones y el complejo automotriz (vehículos y autopartes) con una caída de U\$S 300 millones. Por país de destino, se redujeron las exportaciones de manufacturas industriales al MERCOSUR y de manufacturas del agro con destino a la Unión Europea. Estas reducciones fueron compensadas por aumento de ventas a

China. En términos generales, el balance del período arroja una fuerte desaceleración en el ritmo de crecimiento de exportaciones con respecto a años anteriores, pero todavía con una tasa levemente positiva. Por lo tanto, la exportación no ha contribuido al crecimiento y su evolución se condice con la idea de estancamiento del nivel de actividad.

Un segundo factor para explicar la desaceleración de la actividad económica es la disminución de la producción de granos por condiciones climáticas adversas. Tal como se preveía, la conjunción de escasez de lluvias y heladas tempranas determinó una fuerte reducción de rendimientos. De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de soja cayó un 19% con respecto a la campaña anterior, al pasar de poco más de 49 millones de toneladas a casi 40 millones. Esta merma tiene una relación directa con la disminución de exportaciones del complejo sojero comentada en el párrafo anterior. A partir de la fuerte reducción de volúmenes de producción, cabe suponer un impacto indirecto significativo a través de redes comerciales ligadas al sector agrícola. Esta importancia se puede apreciar en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires; de acuerdo a estimaciones propias el gasto total en concepto de labores, semillas, fertilizantes, agroquímicos, cosecha y transporte para la campaña agrícola regional 2011/12 sumó cerca de US\$700 millones (ver informe en esta edición de IAE “El agro impulsa la economía regional”).

Por lo señalado hasta este punto, en la fuerte desaceleración del crecimiento observado en poco menos de la mitad del año en curso, ha incidido el contexto internacional y el impacto de factores climáticos adversos sobre la producción agrícola. No obstante, el factor gravitante para explicar el cambio de escenario ha sido la dificultad para producir e invertir por las medidas adoptadas desde octubre y su impacto negativo sobre las expectativas.

Las decisiones del gobierno revelan con claridad las prioridades o ejes de la política económica: atesorar la mayor cantidad de divisas a efectos de atender compromisos de deudas en dólares manteniendo el nivel de reservas y evitar grandes ajustes en la tasa de crecimiento del gasto público nacional, recurriendo a la emisión para financiar déficit. De este modo, se optó por imponer estrictos controles a la importación y compra de moneda extranjera. A través de prohibiciones, se buscaba forzar un freno a la fuerte demanda de divisas y por esta vía, contener la pérdida de reservas del Banco Central. Frente a las dificultades para implementar ahorro de gastos con el recorte de subsidios a la energía y el servicio de transporte, se sancionó una nueva ley autorizando al Banco Central a aumentar en forma sustancial la emisión de moneda para financiar gastos del estado. Como complemento y a efectos de contener el gasto generado por las importaciones de combustibles e intentar poner en marcha un plan de inversiones destinado a incrementar la oferta de gas y petróleo, se expropió la participación accionaria de REPSOL SA en YPF SA. Ante el estancamiento del nivel de actividad y a efectos de evitar una profundización de la tendencia al déficit fiscal impulsada por el menor crecimiento de la recaudación tributaria, se redujo el ritmo de transferencias de fondos a gobiernos provinciales. Esta situación puso en evidencia una precaria situación financiera en las principales provincias, siendo Buenos Aires el caso con mayores dificultades. Por último, para intentar dar impulso al sector de la construcción paralizado por las dificultades para realizar transacciones en dólares, se recurrió al financiamiento del ANSES con el objetivo de lanzar un amplio programa de crédito subsidiado dirigido a la construcción de viviendas. Por el lado de las empresas, el Banco Central impuso al sistema bancario la obligación de aumentar el crédito para inversión por un monto equivalente al 5% del total de depósitos de cada entidad, a una tasa de interés fija del 15% y con plazos no menores a los 3 años. Los préstamos deberían estar acordados antes de fin de año, debiéndose canalizar a pymes no

menos del 50% de la capacidad prestable.

En resumen, el gobierno busco vías para eludir la corrección de los desequilibrios en las cuentas fiscales, haciendo uso de las reservas del Banco Central generadas por la exportación del complejo sojero, y del crédito por emisión de moneda sin respaldo. Los resultados de esta política acentuaron el atraso de tarifas y persisten las dudas sobre cómo se revertirá la desinversión en el sector energético. A ellos se sumaron otros nuevos desequilibrios como las dificultades en el sector de la producción por las trabas a la importación de insumos y bienes de capital; las dificultades del sector exportador por las trabas impuestas como represalia por la no autorización del ingreso de productos desde el exterior; el aumento de precios por la escasez de productos importados y la suba del dólar marginal; la paralización de transacciones comerciales por la dificultad para adquirir dólares y la incertidumbre generada por la creciente brecha entre el dólar marginal y el tipo de cambio oficial. La inflación no ha cedido y por lo tanto, continua el deterioro de los márgenes de rentabilidad de sectores exportadores por el atraso del tipo de cambio oficial con respecto al resto de los costos, en modo especial, el salarial e impositivo. Por otra parte, los gobiernos provinciales encuentran cada vez mayores dificultades para sostener el ritmo de generación de ingresos, en tanto que los gastos, principalmente salarios, crecen a la par de la inflación.

Esta suma de dificultades se ha visto reflejada en una caída de los niveles de confianza. En la actualidad, varios indicadores revelan el deterioro de expectativas de la población. El índice de confianza del consumidor nacional estimado por la Universidad Di Tella, cayó un 25% desde septiembre hasta junio. El nivel actual resulta comparable al observado en octubre del 2008 cuando irrumpe la crisis financiera en la economía mundial. Otro reflejo de la falta de confianza de inversores es la caída de casi un 20% en el índice Merval en la primera mitad del año, y el aumento del riesgo país medido por el EMBI desde 857 a más 1.100 puntos básicos en el mismo período. A estos indicadores, se ha sumado otro que resurge en épocas de incertidumbre y con mercados cambiarios intervenidos, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el marginal, llegando a alcanzar niveles superiores al 40% al promediar el mes de julio. De alguna forma, este último indicador reemplaza a la fuga de divisas. No se trata de un dato nuevo por cuanto la desconfianza de inversores y consecuente fuga de capitales es un proceso ya instalado desde hace años, lo que ha cambiado es el costo de “fugar” capitales por las restricciones cada vez mayores a las operaciones con dólares y que se ve reflejado en la tendencia al alza del tipo de cambio marginal.

## Perspectivas

Durante los próximos meses, la evolución de factores externos propiciaría una mejora del nivel de actividad y consecuentemente una menor tensión tanto en el frente fiscal como cambiario. En primer lugar, el ascenso del precio de los granos por la sequía en Estados Unidos lleva a las cotizaciones a máximos históricos. La cotización de la soja en el mercado de Chicago ha superado los 645 dólares. Dado que en el mes de enero se ubicaba en torno a los 430 dólares, en lo que va del año lleva un incremento del 50%, concentrado fundamentalmente las fuertes alzas registradas en el mes de julio. De acuerdo a las cotizaciones del mercado de futuros, en los próximos meses se espera que comience una suave declinación a medida que se recomponga la oferta con aumentos del área sembrada de los principales países productores. Este oportuno cambio de las condiciones de mercado se traduciría en un mayor nivel de inversión en el agro generando un efecto positivo sobre vastos sectores de la economía, en

particular, del gobierno nacional y provinciales con una recuperación en el ritmo de crecimiento de la recaudación. También debería mejorar la perspectiva en el frente cambiario por el ingreso de divisas asociado a un mayor flujo de exportaciones.

El segundo factor que podría determinar una mejora sustancial en el sector industrial podría ser el repunte del complejo automotriz por una recuperación de la demanda de exportaciones a Brasil, lo que le permitiría al sector revertir la tendencia negativa observada a lo largo del año. De acuerdo a datos de ADEFA, el balance del primer semestre del año en comparación a igual período del año anterior arrojaría resultados negativos con una caída del 15.4% en la producción, determinada por una caída en las exportaciones del 28,4%.

A ello podría sumarse algunas medidas que podría tomar el gobierno para dar impulso a la demanda como el aumento del gasto social (jubilaciones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo), la disminución de la presión tributaria a través del aumento de los mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias y el pago de los servicios del título BODEN 2012. No obstante, el creciente déficit fiscal deja un margen muy acotado para políticas fiscales expansivas.

Estos factores podrían contribuir a estabilizar la situación actual y evitar que se profundice el deterioro en el nivel de actividad y empleo, siempre asumiendo que no se agudizaría la crisis en los países europeos ni ocurran grandes sobresaltos en la economía china, aunque cabe tener en cuenta que estos factores de riesgo si bien no conforman el escenario esperado, no se pueden descartar en el mediano plazo. En contrapartida, persistirán los desequilibrios antes comentados que impiden al país capitalizar una situación externa excepcional. Como se señaló antes, no se observan señales de disminución en la tasa de inflación en torno al 25% anual, pese al menor ritmo de actividad. Por la dificultad de los salarios para equiparar el ritmo de inflación, sumado a una débil demanda de empleo y la fractura de la representación sindical, cabe esperar un agravamiento de la conflictividad laboral. La necesidad de corregir la tendencia al déficit fiscal llevará a que el estado deba ajustar en un contexto de estancamiento. El cierre de la economía continuará generando presiones inflacionarias, dificultades para producir y desaliento a la inversión. Por la dificultad para realizar transacciones en moneda extranjera y el congelamiento de la obra pública, persistirán las malas condiciones en la industria de la construcción y en el mercado inmobiliario. La imprevisibilidad de la política gubernamental se traduce en una pérdida de confianza que atemoriza a consumidores e inmoviliza a inversores, y por lo tanto resta dinamismo a la actividad económica. Por ello, podría haber una mejora por factores coyunturales pero no están dadas las condiciones para una recuperación sostenida en el tiempo. ■

## Dependencia fiscal de las provincias

■  
*Las bases impositivas con mayor potencial recaudatorio se encuentran tomadas por la Nación.*

■  
*El sector público nacional se apropia de la mayor parte de los recursos tributarios.*

■  
*Hay un desbalance entre la transferencia de funciones de la Nación hacia las provincias y la transferencia de recursos.*

Recientemente, la provincia de Buenos Aires ha realizado una controvertida reforma impositiva que probablemente no logre solucionar las serias dificultades fiscales que enfrenta en la actualidad. En las últimas ediciones del IAE se realizó un análisis sobre este tema, donde se puso de manifiesto el desequilibrio casi permanente en las cuentas de la provincia.

Sin embargo, si se amplía la perspectiva y se contempla el total de provincias argentinas puede apreciarse que la situación fiscal del total de jurisdicciones también es comprometida en 2012. No solamente Buenos Aires tiene problemas para cubrir sus excesos de gasto.

Un análisis integral de la cuestión exige observar qué ocurre con la forma de obtener recursos que disponen las provincias. Como se ha descripto en informes anteriores, los gobiernos subnacionales tienen la facultad de obtener recursos propios mediante el establecimiento de impuestos provinciales y también reciben recursos del gobierno central. Y esto conduce al tratamiento del tema de la coparticipación en Argentina.

Al coexistir en un mismo territorio diferentes niveles de gobierno, se presenta el problema de distribuir las facultades fiscales entre la Nación y las provincias. Las bases impositivas generales y amplias son las que tienen mayor potencial de recaudación y se encuentran ya tomadas por impuestos nacionales, como son el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. La Constitución argentina establece que los gravámenes internos, como los mencionados precedentemente, son coparticipables, es decir que la materia imponible se comparte entre la Nación y las provincias.

Si las responsabilidades de gasto de las provincias exceden las posibilidades de recaudar que les brindan las fuentes de recursos impositivos que disponen, puede producirse el fenómeno que se conoce como “desequilibrio vertical”. En ese caso, se requerirán transferencias desde el gobierno nacional hacia el nivel provincial. El sistema de coparticipación vigente en Argentina constituye una forma de transferencia que genera en los distintos niveles de gobierno comportamientos tendientes a captar la mayor porción de la masa de recursos coparticipables.

A lo largo del presente estudio, se analizará cómo es la situación actual con respecto a la transferencia de fondos desde la Nación hacia las provincias.

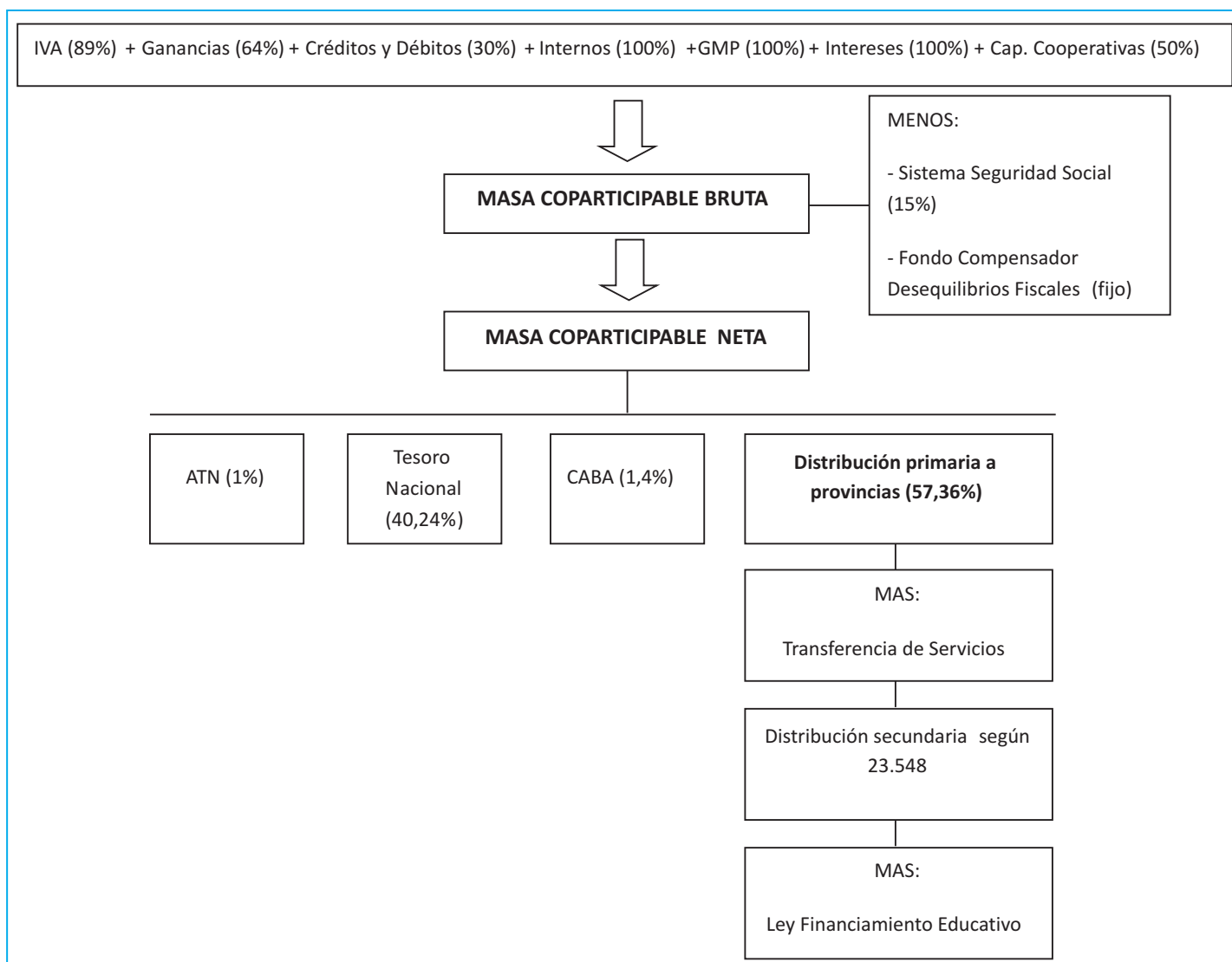
## La organización en el caso argentino

### La ley de Coparticipación Federal de Impuestos

El sistema de coparticipación vigente en Argentina está organizado según la Ley 23.548 y se articula en torno a una masa de recursos compuesta por la recaudación del IVA, Ganancias, Impuestos Internos, Ganancia Mínima Presunta e Impuesto sobre los Débitos y Créditos, entre los principales. De acuerdo a cuál sea el impuesto, se destina un porcentaje de la recaudación total a la denominada masa coparticipable bruta. En el Esquema 1 puede apreciarse con detalle la conformación del actual sistema.

Antes de la formación de la masa coparticipable bruta se efectúan diferentes detracciones de la recaudación de cada impuesto, que tienen finalidades distintas y suelen cubrir obligaciones del gobierno nacional. La proliferación de estas “precoparticipaciones” influye negativamente sobre el caudal de fondos que se distribuiría posteriormente entre las diferentes provincias argentinas.

Esquema 1



Una vez determinada la masa coparticipable bruta, se deduce un 15% para el financiamiento del sistema nacional de seguridad social y otros gastos operativos, y un monto fijo para el fondo compensador de desequilibrios fiscales provinciales. Esto da lugar a la denominada “masa coparticipable neta”.

Del total de la masa coparticipable neta, la distribución primaria a las provincias asciende al 57,36%, conservando el tesoro nacional un 40,24%. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obtiene el 1,4% mientras que el remanente (1%) se destina al fondo de Aportes del Tesoro Nacional. En tanto, la distribución secundaria, es decir, el porcentaje de la distribución primaria que corresponde a cada una de las provincias se determina según la ley 23.548.

A la masa coparticipable neta que se reparte entre las provincias se adiciona una suma fija anual (1.284 millones de pesos) que responde a la Transferencia de Servicios desde la Nación hacia las provincias y CABA en virtud de la Ley 24.049 de 1992 (que reglamenta la transferencia de escuelas). Este monto se detrae previamente de los recursos a participar entre las provincias y luego, al incorporarse a la masa coparticipable neta, se distribuye con criterio diferente al que indica la Ley 23.548, alterando de ese modo los coeficientes iniciales de la ley y pretendiendo reflejar las responsabilidades de gasto de cada provincia, vinculados principalmente con la cantidad de población. Es interesante señalar que el monto recibido por cada jurisdicción es fijo todos los años, es decir que no tiene ninguna clase de actualización. Por ello, la importancia de esta suma a lo largo del tiempo se diluye mientras que los gastos de las provincias como consecuencia de la prestación del servicio educativo (fundamentalmente salarios) son crecientes, especialmente en estos últimos años de alta inflación anual. Si bien hay un acuerdo bastante generalizado a favor de la descentralización de algunos servicios, como la educación y la salud, para que un gobierno subnacional pueda atender más fielmente las preferencias de la población que los demanda, necesariamente la transferencia de responsabilidades de gasto debe ir asociada a la transferencia de recursos para que no se produzcan desequilibrios verticales. Esta situación no se verifica en el esquema actual, y Buenos Aires, la provincia con mayor demanda educativa junto con Córdoba y Santa Fe, resulta sumamente perjudicada.

Adicionalmente a este monto fijo anual, se suma también un aporte que responde a la Ley de Financiamiento Educativo N°26.075/06. En este caso no se trata de una suma fija, pero nuevamente el criterio de distribución entre las jurisdicciones no responde a la Ley 23.548 y se fija anualmente en función de distintos criterios relacionados con la matrícula educativa de cada jurisdicción.

La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en su artículo 7º establece una garantía de distribución mínima, al determinar que el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por dicha ley. La realidad es que desde hace ya muchos años no se cumple este artículo, poniéndose de manifiesto el constante avance que tiene la Nación sobre los recursos tributarios totales.

Cuando un país se organiza de un modo federal corresponde que las provincias tengan ejercicio pleno de poder fiscal. Esto es, que tengan la facultad de establecer los impuestos y todos sus elementos, que los recauden y también que decidan sobre el uso de la recaudación. En un contexto de coparticipación impositiva como el que actualmente rige en Argentina, las transferencias desde el gobierno central son incondicionales y automáticas, por lo que en lo referido a tales fondos, las provincias solamente tienen facultad de decidir el destino de los fondos. La

incondicionalidad significa que no hay una especificación acerca del modo en que los gobiernos subcentrales pueden gastar los fondos transferidos por la Nación en concepto de coparticipación, en tanto que la automaticidad hace referencia al hecho que los fondos se asignan de acuerdo a una regla preestablecida, lo que elimina la discrecionalidad por parte del gobierno central y las posibilidades de hacer lobby para obtener mayores recursos por parte de las provincias.

Este sistema, donde las provincias tienen por un lado impuestos propios y por el otro reciben fondos del gobierno central implica que los gobiernos provinciales no establecen la totalidad de sus impuestos, no determinan el nivel de presión fiscal que grava a sus residentes ni recaudan todos los gravámenes. Esta circunstancia debilita la responsabilidad económico-política de las provincias, debido a la separación de las decisiones de gasto, que corresponden al gobierno provincial, y de recaudación, que corresponden al gobierno central. Por otra parte, como es el gobierno central quien determina los componentes principales de los impuestos vigentes, se elimina una posible competencia entre los gobiernos provinciales, acentuando el poder de monopolio de los mismos que puede manifestarse en una presión fiscal superior a la deseable o en un tamaño del sector público excesivo, tal como se observa últimamente en el desempeño de la mayoría de las provincias.

Debido a que el esquema de coparticipación en última instancia supone la explotación conjunta de un recurso de propiedad común a la Nación y a las provincias, presenta la necesidad de acordar de qué modo se reparte dicho producto común. Una vez que cierto esquema se encuentra vigente (como la actual Ley 23.548), y en virtud de las disposiciones de la Constitución Nacional, su modificación resulta sumamente compleja, sobre todo en momentos de bajo nivel de actividad económica. Al tratarse de una cuestión redistributiva, cualquier mejora porcentual de una provincia necesariamente se traduce en una menor participación para otra u otras. Por lo tanto, lograr la mayoría necesaria para la modificación del statu quo resulta muy difícil. Más aún, si se tiene en cuenta que en el caso argentino se trata de un doble reparto: la distribución primaria entre la Nación y el conjunto de las provincias y la distribución secundaria, es decir, la participación relativa de cada provincia.

Como último aspecto para reflexionar, vale decir que tal como ha sido implementada en Argentina la coparticipación impositiva, en el coeficiente que corresponde a cada provincia no puede distinguirse cuánto recibe en carácter devolutivo y cuánto por redistribución. Esta imposibilidad de diferenciación crea ilusión fiscal, dificultando la adopción de decisiones adecuadas. Esta estructura fomenta la acumulación de resultados fiscales deficitarios en las provincias.

## Los arreglos laterales

Tal como se resume en la sección anterior, el esquema de coparticipación vigente en la actualidad data, con algunas modificaciones parciales, de 1988 en el marco de la ley-convenio 23.548. Desde aquel entonces, los cambios estructurales de la economía argentina son muy significativos, hecho que se refleja en la discusión de la coparticipación entre Nación y provincias. De hecho, cualquier acuerdo de distribución de recursos que parece razonable en algún momento del tiempo, deja de serlo al cambiar las condiciones iniciales. Esto produce la necesidad de buscar una solución “por fuera” del sistema de coparticipación o de renegociar los porcentajes de distribución fijados inicialmente, con los consiguientes conflictos y soluciones de compromiso.



Por supuesto, el escenario político de cada momento constituye un elemento crucial en la determinación de los resultados, reflejando no solamente el poder que posee el gobierno central en relación con las provincias sino también la influencia relativa que cada una de ellas ejerce sobre los decisores.

A lo largo del tiempo se han sucedido diversos arreglos laterales que han erosionado sistemáticamente la base de coparticipación original y en muchas ocasiones se fundaron en la pretensión de corregir los desequilibrios institucionalizados por la ley 23.548. Como puede apreciarse, rara vez lo consiguen y, por el contrario, incrementan la dependencia fiscal de las provincias con respecto al gobierno central. A continuación se realizará una breve síntesis descriptiva de cada una de las normas específicas que alteran la distribución que originalmente plantea la Ley de Coparticipación Federal.

**Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales Provinciales (Ley 24.130/92).**

Constituye una suma fija de 549,6 millones de pesos anuales que se distribuye entre todas las provincias excepto la de Buenos Aires. Dicho importe, que es fijo, se detrae de la masa coparticipable bruta. Se distribuye discrecionalmente entre las provincias con montos diferenciados. Las más beneficiadas son Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Su carácter fijo hace que, a lo largo del tiempo, su relevancia disminuya paulatinamente tanto en términos absolutos, por los efectos de la inflación, como en comparación con el resto de las transferencias del gobierno central. La ley que lo origina es la misma que establece la detracción del 15% de la masa coparticipable bruta para financiar el Sistema Nacional de Seguridad Social.

Además de los descuentos sobre la masa coparticipable bruta comentados hasta este punto, existen también algunas leyes específicas que modifican los porcentajes que recibe cada jurisdicción. Las más significativas son:

**Fondo de Financiamiento de Programas Sociales del Conurbano Bonaerense (ex Fondo del Conurbano, Ley 24073/92, modificada por decreto 879/92 y Ley 24.621/96).**

La ley que lo crea en 1992 establece que, antes de integrar la masa coparticipable bruta, se debe extraer de la recaudación del impuesto a las ganancias un 10% con destino a este Fondo, que será ejecutado y administrado por la Provincia de Buenos Aires, siendo los giros de carácter directo y automático. Esta misma ley también da origen a una reserva de fondos que se distribuyen entre las demás provincias, formada por el 4% de la recaudación del mismo tributo y repartidas entre ellas en función de las necesidades básicas insatisfechas de cada una. Posteriormente, en el año 1996 se fija un tope de 650 millones al año al fondo destinado a la provincia de Buenos Aires, siendo el excedente repartido entre las restantes provincias de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.548. Esta modificación perjudica notablemente a la provincia de Buenos Aires porque recibe a partir de allí una suma fija que anualmente se erosiona por la inflación y la falta de actualización, mientras que el resto de las provincias sigue manteniendo el 4% de la recaudación de ganancias más el excedente del fondo que originalmente estaba destinado a Buenos Aires. Esta situación, entre otras, contribuye a que, desde 1996, la participación de las transferencias totales que recibe Buenos Aires en relación con lo que recibe el resto de las jurisdicciones disminuya progresivamente.

**Suma fija Art. 5° Ley 24.699/96 Pacto Federal.** Constituye una suma fija de \$440 millones anuales que se distribuye entre todas las provincias, extraída de la recaudación del impuesto a las ganancias bruto (antes de girar a la masa coparticipable bruta). La distribución entre las distintas jurisdicciones se realiza en función de los coeficientes de coparticipación secundaria determinados por la Ley 23.548. Nuevamente, por tratarse de una suma fija, la situación de las provincias mejora con respecto a los

recursos que capta la Nación solamente en el momento en que se implementa la nueva normativa, haciéndose menos significativos los beneficios con el transcurrir del tiempo.

**Bienes Personales, Ley 23.966.** Se detrae una suma fija anual con destino a INCUCAI y del monto restante, el 97,73% se distribuye de acuerdo a la Ley 23.548. Debe señalarse que al no integrar la masa coparticipable bruta, no sufre las disminuciones con destino al sistema de seguridad social ni al fondo compensador de desequilibrios fiscales provinciales.

Además de las leyes específicas comentadas precedentemente, existen otros conceptos que también son parcialmente participados a las provincias, pero que no modifican sustancialmente el monto de las transferencias. Tal es el caso de FONAVI, FEDEI, Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas, Transferencias de Empresas Eléctricas, etc.

Es interesante comentar también las características del **Fondo Federal Solidario** creado según el Decreto 206/2009. Se encuentra por fuera del esquema de coparticipación y está compuesto por el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja por parte del gobierno nacional. Originalmente, los recursos provenientes de tributos al comercio internacional corresponden a la Nación, pero a partir de 2009 se distribuye una parte de los derechos de la soja y derivados, según los coeficientes de coparticipación secundaria establecidos por la Ley 23.548 tanto para las provincias como para CABA. Los fondos distribuidos por este concepto están ligados al desempeño de la comercialización de soja y derivados y al precio de exportación de los productos. Desde su creación, se observa un incremento muy importante entre 2010 y 2009, mientras que al comparar 2011 con 2010 se pone de manifiesto una reducción del 3% en los recursos percibidos por las jurisdicciones provinciales.

Por último, existen los **Aportes del Tesoro Nacional** a las provincias, destinados de acuerdo a la ley que le da origen (23.548) a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. El criterio de distribución es discrecional. Se componen con un 1% de la masa coparticipable, un 2% del Impuesto a las Ganancias, una suma fija del mismo impuesto y un porcentaje del Impuesto a los Bienes Personales.

## Los números de los últimos años

Del análisis de la distribución de recursos desde la Nación hacia las provincias surge claramente que el problema de financiamiento del sector público provincial es de larga data, que el participación del gobierno central en los recursos tributarios totales es creciente, que el desbalance de recursos entre los distintos niveles de gobierno es realmente significativo y que Buenos Aires es la jurisdicción que más perjudicada ha resultado a partir de los arreglos por fuera de la ley 23.548.

En el Gráfico 1 se observa la evolución de las transferencias en los últimos años. El volumen distribuido entre la Nación y las provincias de acuerdo a la ley 23.548 es creciente, luego de una caída observada en 2009, en concordancia con la evolución de la recaudación de los principales tributos nacionales a partir de un mayor nivel de actividad. Puede apreciarse que la brecha entre la masa coparticipable bruta y la masa coparticipable neta es prácticamente constante en el tiempo, debido a que

la principal diferencia entre ambos conceptos está dada por la deducción del 15% con destino al financiamiento del sistema de seguridad social, mientras que el Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales pierde importancia relativa por ser una detracción fija muy inferior a los millones destinados al sistema de seguridad social. En el eje de la derecha del gráfico se refleja la caída de este fondo en el tiempo, producto de la erosión inflacionaria. Tal como se detalla en el análisis previo, esta masa coparticipable bruta se distribuye entre el tesoro nacional, las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el fondo ATN. La conclusión que surge es que el volumen de recursos a repartir de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos se incrementa en los últimos años. Concretamente, entre 2011 y 2010 el aumento en términos reales es del 16%.

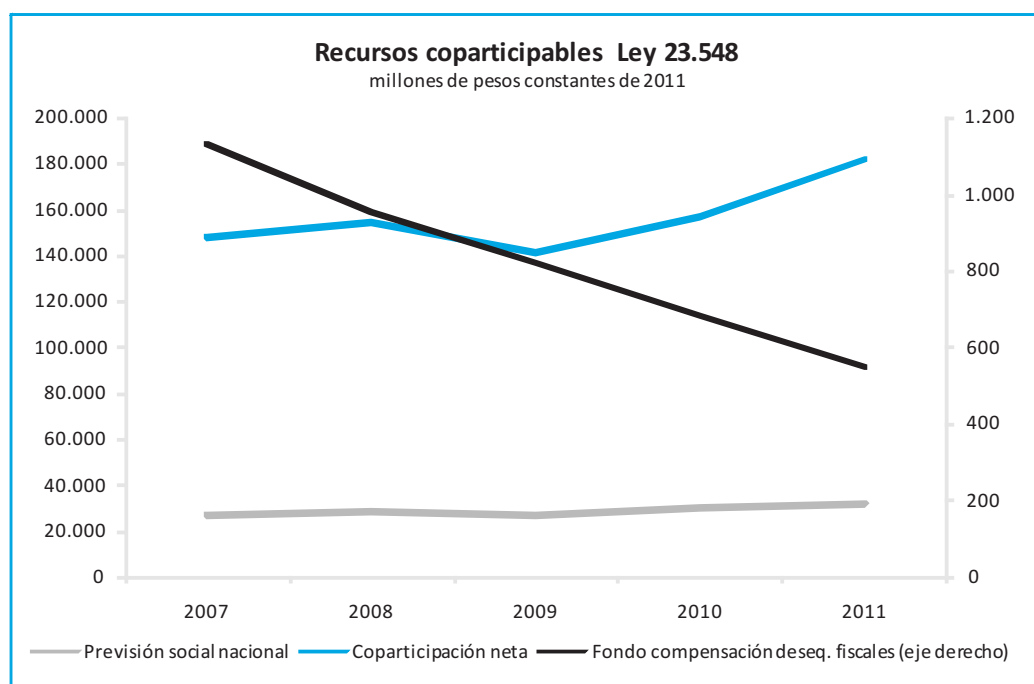


Gráfico 1

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía de la Nación.

Un aspecto importante para destacar en relación con la Ley de Coparticipación 23.548 es el límite mínimo garantizado por el artículo 7º de la norma. De acuerdo a la ley, el monto a distribuir entre las provincias no podrá ser inferior al 34% de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles por dicha norma. En el período analizado, en ninguno de los años se cumple la garantía ya que los recursos coparticipados según la ley 23.548 solamente son un 20% del total de recursos tributarios. Si se toma como medida lo ocurrido en 2011, el cumplimiento de la garantía establecida implicaría que las provincias deberían haber recibido casi 80 mil millones de pesos más de los que efectivamente percibieron. Es claro que esta cifra resolvería los problemas fiscales del conjunto de las provincias, que para 2012 podrían tener una necesidad de financiamiento del orden de los 45 mil millones de pesos. Si bien es importante destacar que ni siquiera durante el período de la convertibilidad se cumplió esta cláusula de garantía, al recurrir al texto actualizado e la Ley de Coparticipación la misma sigue vigente. Si no es posible lograr el cumplimiento, por lo menos debería realizarse la modificación porque de lo contrario se está infringiendo una norma.

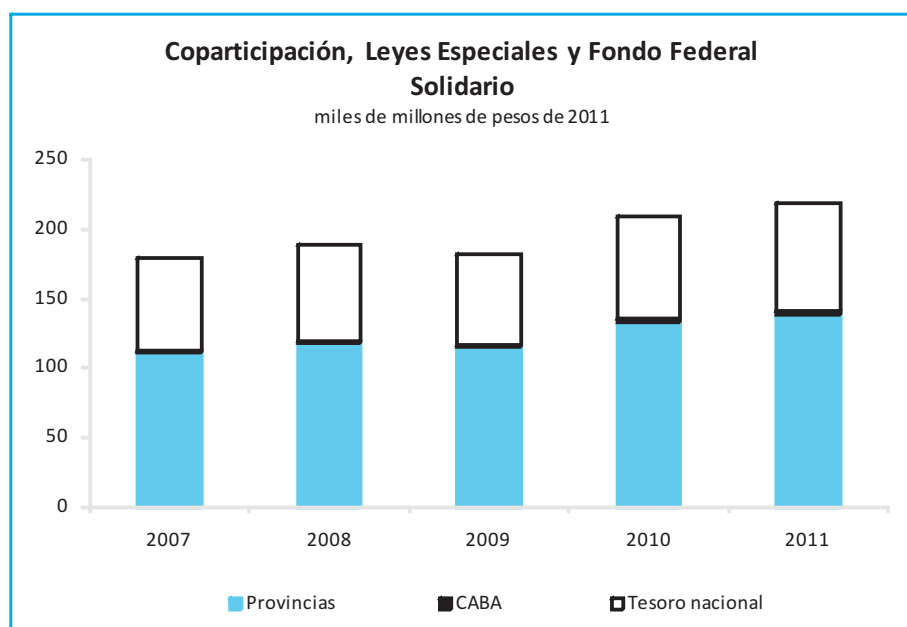
Más allá de la estimación de los recursos que pierde el conjunto de las provincias, el aspecto más importante a destacar en esta cuestión, desde un punto de vista institucional, es la imposibilidad que tienen las provincias de reclamar el

cumplimiento de la ley. Es evidente la asimetría de poder entre la Nación y el conjunto de las provincias. Si bien, la Nación en última instancia termina auxiliando a las jurisdicciones con dificultades financieras, es diferente el mecanismo por el que los gobiernos subnacionales acceden a los fondos. Si se cumple la ley vigente, el mecanismo es claro y automático dado que responde a una regla establecida de antemano. Si los fondos van por canales diferentes, la capacidad de lobby de cada provincia y el entorno político del momento son factores que tendrán incidencia directa en el resultado. No es lo mismo reclamar lo que por ley corresponde que agradecer los favores del gobierno central.

Si se amplía el análisis anterior incorporando la distribución de las leyes especiales adicionadas a la Ley 23.548, entre las que se incluye en Fondo Federal Solidario, también se observa un fondo a distribuir que es creciente a lo largo del tiempo en valores constantes (ver Gráfico 2). El Fondo Federal Solidario significa en 2011 un aporte adicional para las provincias de 7.250 millones de pesos, un 3% inferior al girado durante 2010. De ese total, le corresponden a la provincia de Buenos Aires cerca de 1.500 millones de pesos.

Gráfico 2

Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Economía de la Nación.



El segundo aspecto a dirimir, es la participación relativa que tienen la Nación, las provincias y CABA en ese **fondo común**. En este sentido, se observa que si se toma la Ley de Coparticipación, las leyes especiales y el Fondo Federal Solidario, entre 2007 y 2011 la Nación pierde participación relativa en comparación con el total de provincias. Esto se explica porque entre las leyes especiales hay conceptos que se reparten sólo entre las provincias, como es el caso del ex fondo del conurbano o del fondo federal solidario, tal como se explica con detalle en el análisis de la sección anterior. Esto forma parte de los denominados arreglos laterales que pretenden mejorar la situación de las provincias.

Sin embargo, hay que tener cuidado en la forma en que se analizan los números. Si bien es cierto que del fondo común repartido entre provincias, Nación y CABA, las provincias mejoran levemente su situación recuperando algún punto de la participación porcentual, la Nación, además de recibir su parte, se apropia de otro gran caudal de recursos que no integran la masa coparticipable bruta. Debe

recordarse que no son todos los tributos los que se coparticipan y aún en los casos en que hay distribución a las provincias, muchas veces no se reparte el total sino una parte (como por ejemplo en IVA, ganancias, monotributo, cheques). Por ello, es interesante explorar la participación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires en el total de recursos tributarios recaudados. En 2007 las provincias captan por todo concepto distribuido el 27,1% del total de recursos tributarios, mientras que en 2001 la participación cae al 25,7%. No solamente se refleja una menor participación sino que también debe señalarse que la distribución hacia el conjunto de las provincias es inferior a un tercio de los recursos totales.

Una vez analizada la forma en que se reparten los recursos entre la Nación y las provincias, se estudia la distribución secundaria, es decir la proporción de recursos que recibe cada una de las jurisdicciones. Al respecto debe aclararse que, por un lado, están los recursos distribuidos de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y por el otro todas las transferencias originadas en leyes especiales.

En el primero de los casos se trata de la masa coparticipable neta formada por todos los tributos reflejados en el Esquema 1, a la que debe sumarse la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 y la Transferencia de Servicios Ley 24.049. A lo largo del periodo analizado se observa que la participación relativa de cada jurisdicción es relativamente constante dado que la regla de distribución entre jurisdicciones del principal porcentaje de fondos está fijada por los coeficientes de distribución secundaria establecidos en la Ley 23.548. Si bien en el caso de las leyes 26.075 y 24.049 la parte que recibe cada provincia se determina de un modo distinto, el escaso peso que tienen estos conceptos en el volumen distribuido hace que los porcentajes de cada provincia reflejen con bastante fidelidad los de la ley 23.548. Del total de jurisdicciones, la que capta la mayor proporción de recursos es la provincia de Buenos Aires (casi 23 mil millones de pesos en 2011), seguida de Santa Fe y Córdoba (ambas con algo de 9.200 millones de pesos), tal como puede apreciarse en el Cuadro 1.

En el segundo caso, a las sumas recibidas por cada provincia comentadas anteriormente, se suman las leyes especiales que alteran los coeficientes de distribución originales. Estas leyes especiales representan más del 30% del total de recursos que reciben las provincias. Puede apreciarse que al incluirse estos conceptos, la participación relativa de la provincia de Buenos Aires disminuye notablemente (ver Cuadro 2). En 2001, la participación de Buenos Aires en el total de transferencias a las provincias era del 24%, mientras que en 2011 el porcentaje es sólo del 19,9%. La explicación viene dada por los arreglos por fuera de la Ley 23.548 analizados previamente. Tal como se explicó, teóricamente surgen para resolver los problemas de la desactualización de los coeficientes de distribución secundaria de la 23.548 y terminan acentuando los problemas de las provincias que más contribuyen a la formación del fondo común, como es el caso de Buenos Aires.

El ejemplo del Fondo para Programas Sociales del Conurbano Bonaerense (ex Fondo del Conurbano) resulta sumamente esclarecedor respecto de este tema. En el Gráfico 3 se observa la caída desde el 55% en 2001 al 4% en 2011 en la participación de la provincia de Buenos Aires sobre este fondo. Debe recordarse que, de lo recaudado por impuesto a las ganancias, se detrae un 14% para su conformación. Debido a que en 1996 se estableció el tope de 650 millones anuales a la parte que le corresponde a Buenos Aires (antes era para Buenos Aires el 10% de lo recaudado por ganancias) siendo el excedente repartido entre el resto de las provincias, la importancia de esa suma en el total es cada vez menor como consecuencia de los efectos de la inflación y la falta de actualización del monto fijo. En virtud de esta circunstancia, un arreglo que originalmente beneficiaba a Buenos Aires termina perjudicándola severamente,

Cuadro 1

Fuente: elaboración propia  
en base a información del  
Ministerio de Economía de la  
Nación.

Cuadro 2

**Ley de Coparticipación Federal de Impuestos**  
millones de pesos

	2011	Participación
Buenos Aires	22.561	22%
Catamarca	2.830	3%
Córdoba	9.122	9%
Corrientes	3.819	4%
Chaco	5.125	5%
Chubut	1.625	2%
Entre Ríos	5.016	5%
Formosa	3.740	4%
Jujuy	2.919	3%
La Pampa	1.929	2%
La Rioja	2.127	2%
Mendoza	4.284	4%
Misiones	3.394	3%
Neuquen	1.783	2%
Rio Negro	2.592	2%
Salta	3.938	4%
San Juan	3.473	3%
San Luis	2.345	2%
Santa Cruz	1.625	2%
Santa Fe	9.182	9%
Sgo. del Estero	4.245	4%
Tucuman	4.888	5%
Tierra del Fuego	1.271	1%
<b>TOTAL</b>	<b>103.831</b>	<b>100%</b>

**Distribución de recursos desde Nación a provincias**  
**Ley 23.548, leyes especiales y fondo federal solidario**

Participación porcentual por provincia

	2001	2011
Buenos Aires	24,0%	19,9%
Catamarca	2,6%	2,7%
Córdoba	8,1%	8,9%
Corrientes	3,6%	3,9%
Chaco	4,4%	5,0%
Chubut	1,9%	1,7%
Entre Ríos	4,6%	4,9%
Formosa	3,3%	3,6%
Jujuy	2,8%	2,9%
La Pampa	1,9%	1,9%
La Rioja	2,0%	2,1%
Mendoza	4,0%	4,2%
Misiones	3,3%	3,5%
Neuquen	1,9%	1,8%
Rio Negro	2,5%	2,6%
Salta	3,7%	4,0%
San Juan	3,1%	3,3%
San Luis	2,3%	2,3%
Santa Cruz	1,9%	1,6%
Santa Fe	8,4%	9,0%
Sgo. del Estero	3,8%	4,2%
Tucuman	4,4%	4,8%
Tierra del Fuego	1,5%	1,3%
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

mientras que las pérdidas de Buenos Aires se traducen en una ganancia para las demás jurisdicciones. En el Gráfico 4 se expresa en moneda constante, cuánto debería haber recibido anualmente Buenos Aires si no se hubiera establecido el tope de 650 millones anuales y cuál ha sido la ganancia que han tenido el resto de las jurisdicciones como consecuencia del mismo. Si se observa el dato correspondiente a 2011, el cumplimiento del 10% de la recaudación de ganancias para Buenos Aires habría significado un giro adicional superior a los 10.200 millones de pesos para dicha provincia, cifra superior a sus necesidades de financiamiento para el mismo período.

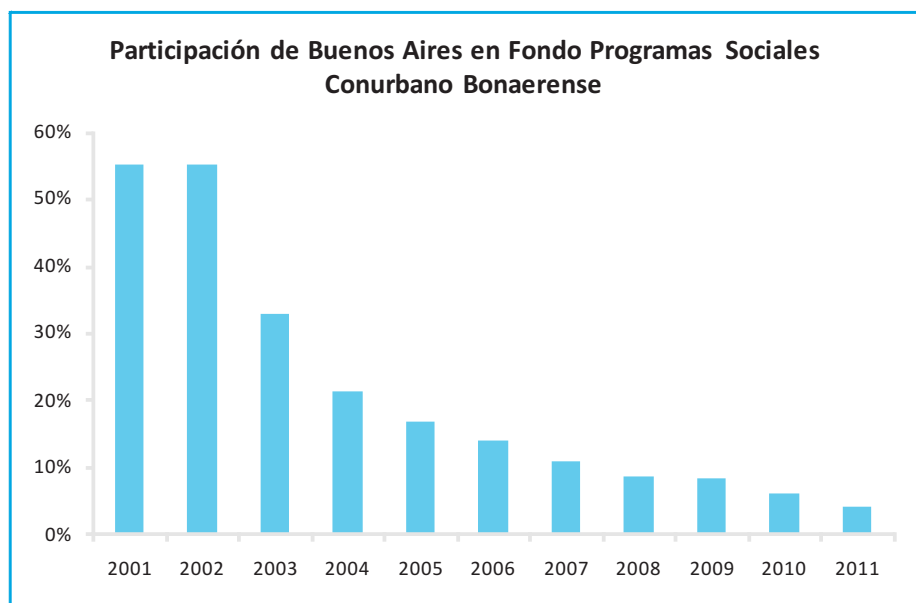


Gráfico 3

*Fuente: elaboración propia  
en base a información del  
Ministerio de Economía de la  
Nación.*

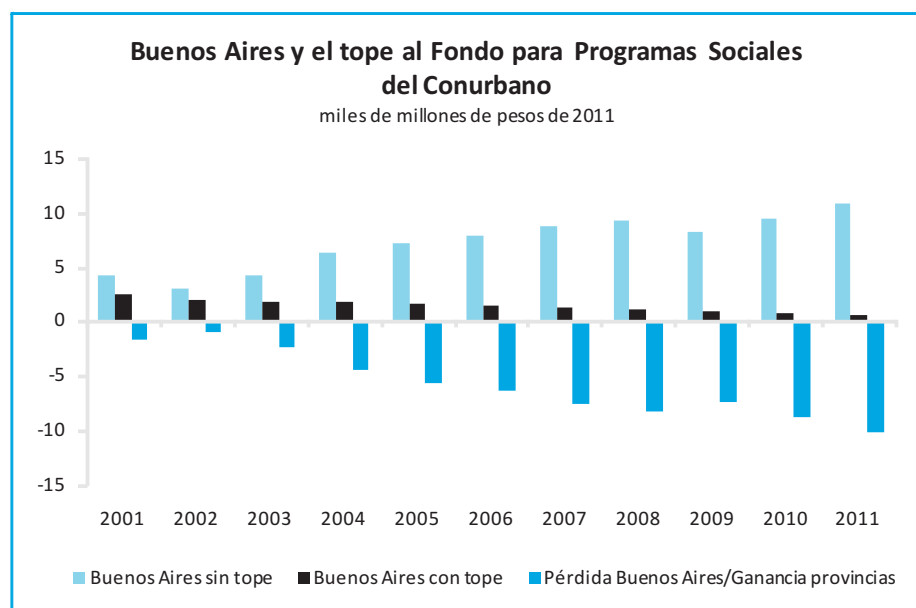


Gráfico 4

## Comentarios finales

Del análisis de las normas que regulan la distribución de recursos entre gobiernos de distinto nivel y de la observación de los números durante los últimos años, surge que la Nación no solamente tiene captadas las bases imponibles más rendidoras sino que también se reserva la mayor parte de los recursos tributarios para atender sus obligaciones.

El esquema central de distribución está determinado por una ley que, con modificaciones no sustanciales, data de 1988. Por lo tanto, los cambios estructurales ocurridos desde aquel entonces exigirían un replanteo total del sistema. Tal como se menciona en el estudio, por tratarse de la distribución de un fondo común y por las reglas que exige la Constitución Nacional para modificar la norma actual, políticamente es sumamente complicado lograr un nuevo acuerdo prevaleciendo de este modo el statu quo, aún cuando en la reforma de 1994 los constituyentes establecieron su modificación. Es menester señalar que en tiempos de bonanza económica resulta más sencillo lograr este tipo de acuerdos redistributivos, mientras que en épocas de escasez no hay interés en las partes, las que terminan aplicando su poder de veto para los posibles cambios.

Por lo tanto, se han realizado numerosos arreglos por fuera del sistema de coparticipación vigente, atendiendo muchas veces a aspectos políticos del momento y no a cuestiones de fondo. Como consecuencia, el resultado final para cada jurisdicción, que por otra parte ha recibido gran cantidad de funciones desde la Nación, es errático, inestable e imprevisible. Los actuales coeficientes de distribución no responden ni a un criterio devolutivo, ni a un criterio redistributivo ni han logrado mejorar la situación regional relativa dentro del país.

La realidad indica que actualmente existe una virtual dependencia fiscal de las provincias con respecto al gobierno central, dado que los tributos que les quedan disponibles también tienen agotada su capacidad recaudatoria y tienen serias observaciones desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad. Si bien, en última instancia, la Nación acude al auxilio de las provincias que tienen dificultades mediante distintos mecanismos, los incentivos que se generan con este comportamiento no son aconsejables para un buen sistema federal. Esto queda particularmente al descubierto en momentos donde se generalizan las complicaciones en el frente fiscal, tal como los es el momento actual. ■



# El agro impulsa a la economía regional

El gasto total en concepto de labores, semillas, fertilizantes, agroquímicos, cosecha y transporte para la campaña agrícola regional 2011/12 suma cerca de U\$S 700 millones.

Al comparar el gasto con el valor de la producción agrícola regional a precios de productor para la campaña agrícola 2011/12 se puede apreciar un reducido margen para cubrir otros gastos como impuestos y reinversión.

En base a los resultados obtenidos en el presente informe no hay margen para incrementar la presión tributaria sobre la actividad primaria regional.

En cada una de las campañas agrícolas se renueva un ciclo de inversión asociado a la actividad productiva, impulsando una parte importante de la economía del sudoeste bonaerense. Si bien esta idea es expresada de manera frecuente por la importancia que tiene el sector a nivel regional, habitualmente no se tiene una verdadera magnitud del gasto generado para cumplir con las diferentes tareas requeridas por los principales cultivos agrícolas comerciales. Nuevas tecnologías de proceso e insumos aplicados al sector en las últimas dos décadas, introdujeron al proceso productivo un mayor nivel de gastos.

El objetivo del presente informe es cuantificar el gasto realizado en la campaña agrícola 2011/2012 a nivel regional, identificando los principales rubros que componen los gastos directos, cosecha y transporte en los cultivos extensivos de secano a nivel regional. En el análisis se supone la superficie sembrada y cosechada en la campaña mencionada a valores actuales para los cultivos de trigo, cebada cervecera, soja, girasol y maíz.

El alcance del informe abarca los gastos directos en labores, semillas, agroquímicos, fertilizantes, como así también los gastos en cosecha y transporte.

## Campaña agrícola 2011/12: datos y supuestos considerados

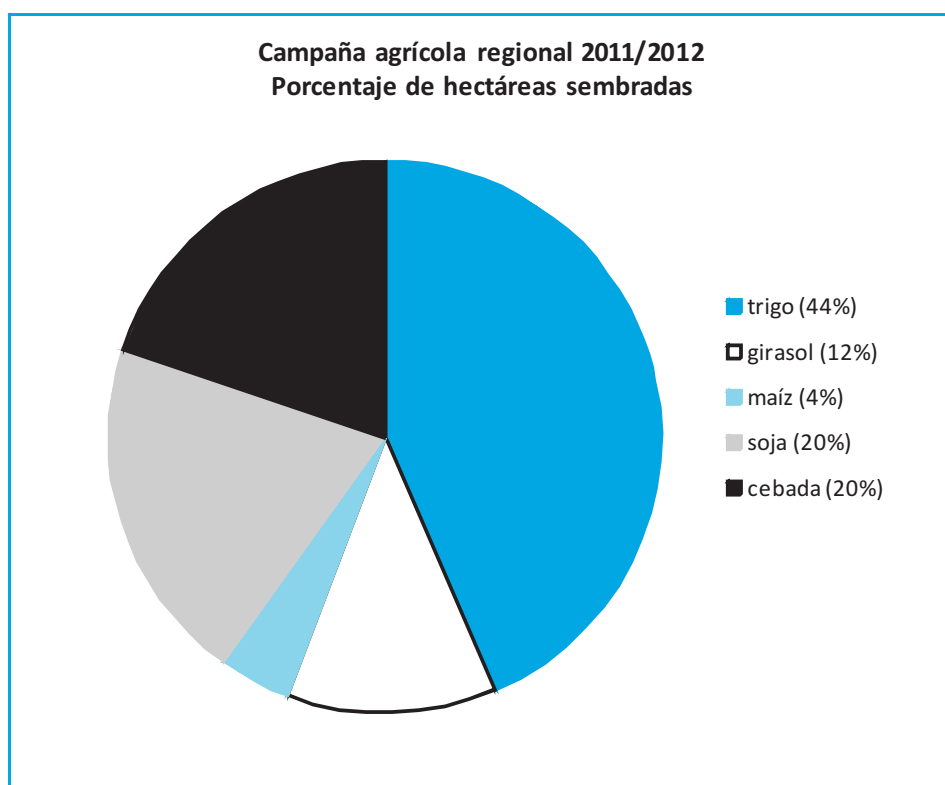
En los 5 cultivos identificados se supone para la soja y el maíz una superficie sembrada similar a la campaña previa por no existir todavía datos precisos al respecto. El supuesto se encuentra fundado en informes aportados por organismos vinculados al sector, en los que se anticipaba una superficie similar a la campaña anterior.

También se excluye del análisis la superficie destinada a los cultivos de avena y sorgo, dado que en su mayoría se utilizan en la actividad ganadera y este sector será abordado en un futuro informe para completar el gasto realizado en la actividad agropecuaria en su conjunto.

La superficie sembrada se distribuye de la siguiente manera (Gráfico 1): el 44 % con trigo, el 20 % con soja, el 20 % con cebada, el 12 % con girasol y el 4 % con maíz. La

suma alcanza una superficie total cercana a las 2 millones de hectáreas y refleja una tendencia estable desde hace 10 campañas.

Gráfico 1



En la estimación del gasto se supone una superficie cosechada superior al 90% respecto a la sembrada según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación que para la campaña considerada expresan esos valores. Esta superficie es utilizada para estimar el gasto incurrido en la cosecha de todos los cultivos durante el periodo analizado.

Para los sistemas de producción agrícola que predominan en la región se consideran algunos supuestos con el objeto de poder acercar el análisis a la realidad productiva del sector:

<sup>1</sup> La siembra directa es una tecnología que considera una menor roturación de la tierra y una mayor utilización de agroquímicos que la siembra convencional. La siembra semidirecta es una tecnología intermedia entre las anteriores.

<sup>2</sup> Los partidos que integran la región bajo análisis son: Bahía Blanca, Cnel Rosales, Cnel Dorrego, Cnel Pringles, Cnel Suarez, Adolfo Alsina, Güamini, Patagones, Villarino, Puan, Saavedra y Tornquist.

- La superficie sembrada se distribuye de la siguiente manera: un 40% con tecnología de siembra directa, un 20% con semidirecta y el 40% restante se realiza a través de siembra convencional<sup>1</sup>. Para la siembra directa se consideran 3 pulverizaciones previas a la siembra, en la semidirecta se considera una pasada de rastra y dos pulverizaciones, mientras que en la siembra convencional dos pasadas de rastra y una pulverización previa a la siembra.
- La cantidad de semilla utilizada en la siembra de los diferentes cultivos varía entre los partidos que se consideran en el análisis como consecuencia de las diferencias en productividad<sup>2</sup>.
- En la estimación del gasto en labores se supone la utilización de maquinaria propia y los valores de referencia (sin considerar el Impuesto al Valor Agregado) fueron aportados por empresas privadas del sector contratista y entidades vinculadas al sector.
- Las labores incluyen las rastreadas, pulverizaciones, siembra y cosecha (gasol, mantenimiento, amortizaciones y repuestos).

La producción agrícola para la campaña 2011/12 a nivel regional superó las 3,6 millones de toneladas, en donde el 46 % corresponde al trigo y el 24 % a cebada cervecera. El porcentaje restante se divide en 15 % de soja, 5 % de maíz y 10 % de girasol. La cosecha fina representa el 70 % de la producción agrícola regional, volumen que se mantiene sin grandes variaciones desde hace más de 10 campañas.

En términos de participación en la producción agrícola nacional los cultivos de trigo y cebada regional representan el 13 % y el 21 % del total, mientras que el girasol lo hace en un 10 %. El maíz y la soja representan una proporción marginal cercana al 1 % en cada cultivo.

## Principales rubros: gastos directos, cosecha y transporte

A partir de los datos y supuestos considerados anteriormente se estimó el gasto total en concepto de labores, semillas, agroquímicos, cosecha y transporte. En estos rubros se concentra la mayor parte del gasto total necesario para producir los 5 cultivos considerados y refleja en magnitud el impacto que genera en la economía regional, la actividad agrícola en particular.

En el Gráfico 2 se puede apreciar la participación de los diferentes ítems estimados y el monto que representa cada uno de ellos. En total suman cerca de U\$S 700 millones y los agroquímicos y fertilizantes representan el 32 % (U\$S 221 millones), las labores el 21 % (U\$S 150 millones), las semillas el 14 % (U\$S 100 millones), el transporte el 20 % (U\$S 140 millones) y la cosecha el 12 % (U\$S 87 millones).

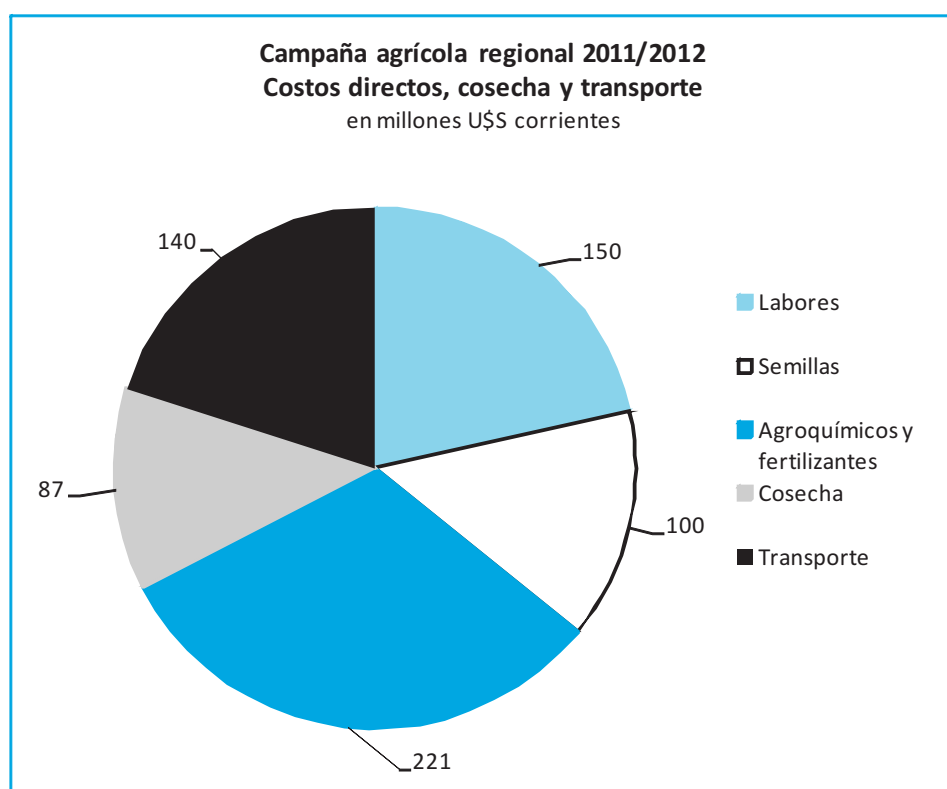


Gráfico 2

Respecto al transporte y a partir de una relación de 27 toneladas por camión y suponiendo que se transporta toda la producción por este medio, se requieren más de 135 mil camiones para llevar la producción hasta el puerto, industria o acopio.

<sup>3</sup> Esta cifra surge de expresar la producción agrícola regional para la campaña 2011/12 a precios de productor.

Al comparar el nivel de gasto anterior con el valor de la producción agrícola regional a precios de productor para la campaña agrícola 2011/12, estimado en U\$S 800<sup>3</sup> millones, se puede apreciar que el margen del cual dispone el sector primario para cubrir otros gastos no considerados en este análisis (estructura, arrendamientos, etc.) los impuestos y la reinversión para la campaña siguiente, no representa una cifra muy importante.

<sup>4</sup> Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.

El monto que destina el sector agrícola regional anualmente es representativo de la importancia sobre la economía regional. Además, si se tiene en cuenta un estudio realizado por AACREA<sup>4</sup>, donde se estima que el 70% del gasto agrícola se localiza en las comunidades en donde se lleva a cabo la producción, la relevancia del gasto estimado anteriormente se incrementa.

## Consideraciones finales

El significativo gasto que realiza el sector primario en la producción agrícola regional, muestra el impacto que genera sobre una importante cantidad de sectores asociados. Entre los que se destacan: maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos, fertilizantes, combustible, repuesto y transporte. Todos estos productos tienen al sector agrícola como uno de los principales demandantes y cualquier efecto sobre su nivel de actividad repercute en las ventas de cada uno de ellos, tanto positiva como negativamente.

La estimación obtenida en el presente informe representa un dato importante en el actual contexto de reforma tributaria a nivel provincial y con efectos indirectos de orden nacional. Los grados de libertad que posee la actividad primaria, como consecuencia del reducido margen entre ingresos y egresos directos no permite soportar la carga que surge a partir de las modificaciones impositivas aprobadas hace un par de meses. Es decir en base a los resultados obtenidos en el presente informe no hay margen para incrementar la presión tributaria sobre la actividad primaria regional, dado que el nivel de gasto necesario para producir es elevado en relación al ingreso. El paso siguiente en caso de no modificarse las distorsiones provocadas por la reforma, sería la inviabilidad productiva de una parte importante del sector agrícola regional con el consiguiente efecto sobre el nivel de actividad económica que esto provocaría. ■

# Comercio exterior durante 2011: particularidades para Bahía

Al grupo de productos exportados tradicionalmente desde la aduana de Bahía Blanca, se adicionan bienes de las economías regionales, complementando y diversificando la oferta exportable.

La mayoría de los productos de Bahía Blanca y su región obtuvo un pico histórico en su valor por tonelada exportada en 2011.

El 62% del volumen del gas natural licuado importado por Argentina en 2011 ingresó por Bahía Blanca, por un valor de 1,1 mil millones de dólares CIF.

La nota esboza diez puntos principales acerca de lo acontecido en relación al comercio exterior contando con los datos provenientes de la Aduana según información provista por el INDEC para el año 2011. Se trabaja en primer lugar con datos de exportaciones, detallando en particular lo que aconteció en Bahía Blanca y sus puntos salientes. Luego se menciona la situación de las importaciones en 2011, haciendo énfasis en los ingresos de gas desde el exterior. Por último se presentan los resultados de la balanza comercial de la aduana Bahía Blanca y del país, según surge de los datos utilizados.

Índice de contenidos:

1. Valores exportados y participación de Bahía Blanca en país
2. Ranking exportaciones: comparativo aduanas
3. Medios de transporte para exportación
4. Destinos principales de las exportaciones desde Argentina y Bahía Blanca
5. Oferta exportable Bahía Blanca: número de empresas y productos “tradicionales” y “no tradicionales”
6. Evolución de precios FOB de productos principales exportados desde Bahía Blanca
7. Valores importados y participación de Bahía Blanca en país
8. Importación de gases en Argentina y Bahía Blanca
9. Importación de vehículos en Argentina
10. Superávit comercial (monto FOB - monto CIF).

## 1. Valores exportados y participación de Bahía Blanca en país

Desde la aduana de oficialización de Bahía Blanca en el año 2011 se registraron exportaciones por 9,7 millones de toneladas y 4,7 mil millones de dólares FOB. Esto implica un crecimiento anual del 7% en volumen y de casi un 35% en monto respecto al dato del 2010 para la ciudad portuaria. Por su parte, el país exportó más de 100 millones de toneladas lo que generó ingresos por casi 84 mil millones de dólares durante el 2011. Según estos valores del 2011, la participación de Bahía Blanca en el volumen total exportado sería de 9,5%, mientras que en términos monetarios se aproximaría al 6%, ratios que permanecen relativamente constantes al observar una serie de exportaciones de los últimos 15 años. El FOB implícito (monto total FOB exportado sobre toneladas totales exportadas) de Bahía Blanca es de casi 490 dólares por tonelada, lo que representa un incremento interanual de un 26% aproximadamente. A nivel país el FOB implícito 2011 fue de 826 dólares por tonelada, incrementándose en un 20% en relación al dato evidenciado en el 2010.

## 2. Ranking exportaciones: comparativo aduanas

Desde hace al menos 9 años la aduana de Bahía Blanca se mantiene en tercera posición del ranking de aduanas del país al observar el volumen exportado desde las mismas, y en quinta posición según el monto total exportado. En relación a toneladas enviadas al exterior, en 2011 fue superada por San Lorenzo y Rosario. Sumando las tres aduanas, se obtiene casi el 70% del volumen total exportado desde Argentina durante el 2011. Para el caso de las sumas monetarias en concepto de exportación, Bahía Blanca es superada por San Lorenzo, Campana, Operativa Capital y Rosario. Estas cinco aduanas generaron el 65% de los dólares provenientes del exterior en concepto de exportaciones en el año 2011. En el ranking de FOB implícito la aduana de oficialización de Bahía Blanca relega varias posiciones y se ubica en el puesto 52 dentro de las 59 aduanas del país. Al igual que lo sucedido para San Lorenzo, Rosario y Necochea, la pérdida de posición para este último ratio mencionado responde esencialmente al envío al exterior de productos de bajo valor agregado, asociado a materias primas, principalmente del agro. Por último, en el ranking que se obtiene según el número de productos diferentes exportados, Bahía Blanca se ubica en el puesto 34, exportando 83 productos diferentes. En los últimos 6 años se mantuvo cercana a la posición número 30. Para el 2011 este ranking fue liderado por Operativa Capital y Ezeiza, con 4.110 y 3.132 productos diferentes respectivamente. El país en su conjunto exportó en 2011 casi 5.000 bienes diferentes.

## 3. Medios de transporte para exportación

El medio de transporte mayormente utilizado para realizar exportaciones es el barco. El 90% de las toneladas exportadas desde Argentina durante el 2011 salió por vía marítima. El camión participó con el 9%. En Bahía Blanca, la incidencia del barco como medio de transporte es aún mayor representando el 98% del volumen total enviado al exterior en 2011. Un análisis particular se realiza para el caso de los envíos realizados por ferrocarril. Para el país en su conjunto, la participación del medio de transporte ferroviario se calcula en el orden del 0,25%. Esta participación se mantiene relativamente estable desde hace 9 años. Para el 2011 fueron casi 260 mil toneladas exportadas implementando esta modalidad de envío al exterior. Sin embargo, según los registros obtenidos para Bahía Blanca, el tren dejó de utilizarse en los últimos 2 años como alternativa de medio de transporte para exportación de bienes. Su participación en el volumen exportado durante los últimos 9 años pasó de ser un 0,36% en el 2006 a no participar en el 2010 y 2011. En Bahía Blanca el ferrocarril fue sustituido por el camión, quien pasó de participar con el 1% en el 2003 a ser el 2,8% en 2009. Al 2011 su participación fue del 1,9%, lo que representó un volumen de casi 183 mil toneladas exportadas desde la aduana de oficialización de Bahía Blanca.

## 4. Destinos principales de las exportaciones desde Argentina y Bahía Blanca

Los tres principales socios comerciales de Argentina son Brasil, China y Chile respectivamente, dado que durante el 2011 3 de cada 10 toneladas se enviaron a estos destinos. El país comercializó bienes con 195 países diferentes. Sin embargo, los primeros 29 ordenados según volumen enviado representan el 85% de las toneladas totales exportadas en 2011. Brasil y Chile compraron unas 18 millones de

toneladas pagando un monto de más de 22 mil millones de dólares. Por su parte, el gigante asiático pagó más de 6 mil millones de dólares por un volumen superior a las 10 millones de toneladas exportadas en 2011 desde Argentina. En el caso de Bahía Blanca, la concentración respecto a los países con los que comercializa es aún superior, ya que en 2011 el 85% de las cargas según volumen se repartió entre 9 naciones, siendo las dos principales Brasil y China, al igual que lo acontecido para el país. De hecho, casi el 56% del total de toneladas exportadas desde Bahía Blanca tuvo como destino Brasil o China. Esta participación de los dos países mencionados anteriormente se mantiene desde hace unos 6 años. En términos de ingresos por exportaciones, las dos naciones representan algo más del 60% del total exportado desde Bahía Blanca, acontecimiento que también se mantiene estable desde hace al menos 9 años. La cantidad total de destinos de las exportaciones desde la ciudad bahiense en 2011 fue de 62 países.

Los productos exportados a Brasil por aduana de oficialización Bahía Blanca en 2011 son trigo, petroquímicos (polímeros de etileno, urea, polietilenos y PVC), malta y combustibles como el propano, el butano y el GLP. Con destino a China, las cargas principales son la soja, aceites vegetales de soja y girasol, cebada cervecera y diversos pescados. Por último, a pesar de su menor incidencia en el total exportado, se destacan los productos enviados a Chile desde Bahía Blanca. Al 2011 se registraron envíos por 177 mil toneladas por un valor de 133 millones de dólares. Los productos destacados se asocian al complejo petroquímico de la ciudad de Bahía Blanca a lo que se suman cebada cervecera y malta, productos alimenticios, gas propano, trigo y sus derivados, entre otros.

## 5. Oferta exportable Bahía Blanca: número de empresas y productos “tradicionales” y “no tradicionales”

Según datos obtenidos de la Agencia de Desarrollo de Bahía Blanca, a mediados del 2011 se identificaban unas 113 empresas diferentes dentro de las catalogadas como pertenecientes a la oferta exportable de Bahía Blanca. Las mismas pueden agruparse por rubros, siendo el 52% del total asociadas a manufacturas de origen industrial, seguidas de 32% de empresas exportadoras de alimentos, un 11% de empresas vinculadas a materias primas y el restante 5% perteneciente a empresas exportadoras de manufacturas de origen agropecuario.

Los principales productos exportados desde Bahía Blanca se vinculan directamente con las cadenas agroalimentaria, petroquímica y de combustibles. Dentro de los 20 primeros productos exportados desde la ciudad, se encuentran 9 agroindustriales (incluyendo materias primas), 7 petroquímicos y 4 combustibles. Esto equivale al 94% del volumen y al 92% del monto exportado en el año 2011. Los primeros tres puestos son para productos primarios como la soja, el maíz y el trigo. Entre ellos representan el 62% de las toneladas y casi el 50% de los dólares obtenidos por exportación. Aquí se observa la gran concentración de bienes que caracteriza a la aduana de Bahía Blanca. Sin embargo, la oferta exportable de la ciudad se completa con algunos bienes que podríamos denominar como “no tradicionales” ya que no pertenecen a las cadenas de valor mencionadas anteriormente. Desde la aduana de oficialización de Bahía Blanca en 2011 unos 36 productos no pertenecían a las cadenas de valor principales ya mencionadas. Esto representa el 43% del total de productos exportados desde la aduana bahiense. Su participación en toneladas y monto FOB no alcanza el 1%. Sin



embargo, observando una serie que va desde el 2004 al 2011, en este último año se alcanzó el mayor número de toneladas de productos "no tradicionales" superando las 74 mil. Dentro de estos bienes se destacan frutas y hortalizas, alfalfa, placas de yeso, ladrillos, sal, alimentos y algunas maquinarias, entre otros de menor relevancia. Si a lo oficializado en la aduana de Bahía Blanca se suma lo oficializado en otras aduanas pero con aduana de salida Bahía Blanca, surgen para el 2011 el envío al exterior de 8.000 kilogramos de nueces provenientes de San Antonio Oeste y 83 toneladas de bebidas espirituosas con aduana de oficialización Villa Regina. Por ende, al gran grupo de productos exportados tradicionalmente desde la aduana de Bahía Blanca, se adicionan bienes de las economías regionales que se registran en la aduana bahiense o que la utilizan como aduana de salida, complementando y diversificando la oferta exportable de la ciudad portuaria.

#### Oferta exportable de Bahía Blanca: Productos "no tradicionales"(\*)

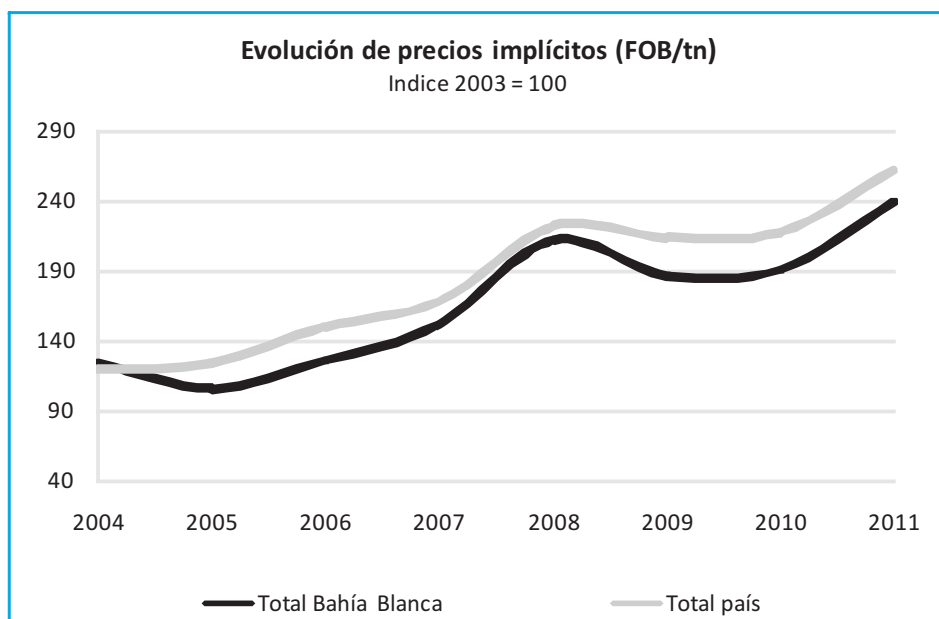
Año	Participación % "no tradicionales" en total		
	Toneladas	Monto FOB	Cantidad
2003	1,1%	0,5%	39%
2004	0,2%	0,3%	48%
2005	0,2%	0,3%	40%
2006	0,2%	0,2%	41%
2007	0,2%	0,3%	41%
2008	0,8%	1,3%	49%
2009	0,7%	1,3%	42%
2010	0,2%	0,5%	40%
2011	0,8%	0,7%	43%

(\*) Se entiende por productos no tradicionales a aquellos que no pertenecen a las cadenas de valor vinculadas a la agroindustria local y el complejo.

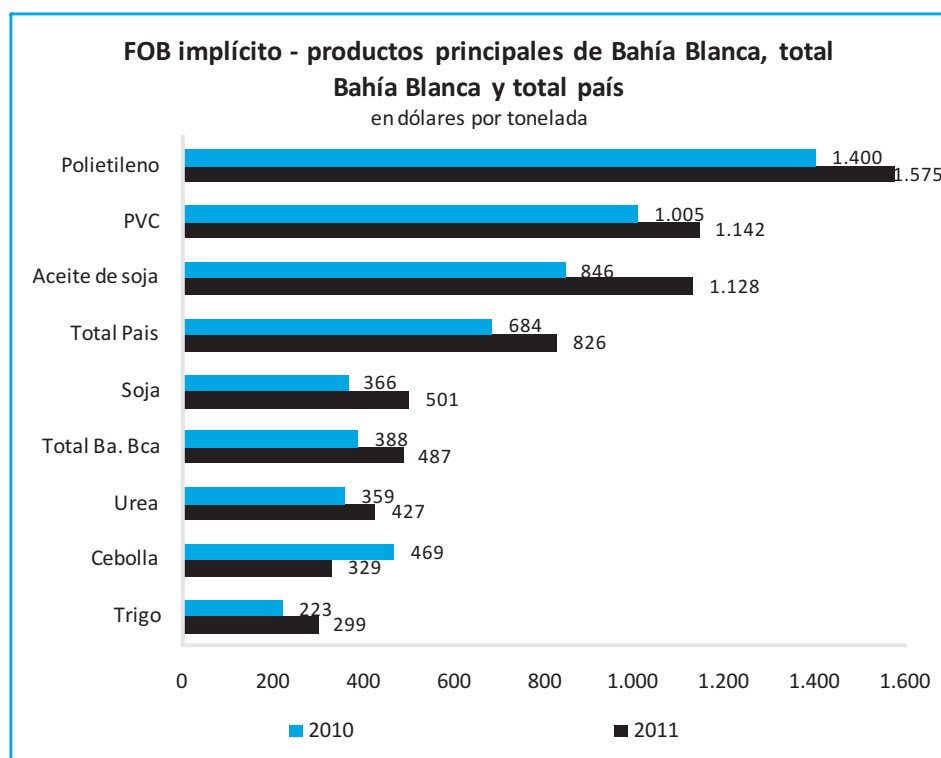
Fuente: CREEBBA con base en INDEC - Aduana.

## 6. Evolución de precios FOB de los productos principales exportados desde Bahía Blanca

La clasificación pertinente para productos principales de Bahía Blanca se asocia a aquellos bienes que tienen una incidencia importante en la economía local y/o regional de la ciudad. En particular se observa la evolución del FOB implícito de 16 productos, entre los cuales se encuentran algunos de origen agropecuario, algunos de origen agroindustrial y algunos de los petroquímicos y derivados de combustible. En términos generales, la variación interanual de precios ha sido muy positiva con incrementos que van desde un 8% a un 66%. Sólo la cebolla tuvo una caída en su precio implícito de un 30% aproximadamente. Dentro de una serie que va desde el año 2003 al año 2011, de los 16 productos, 9 tuvieron su mayor valor por tonelada en el año 2011. Entre ellos se destaca la soja, el maíz y el trigo, a los que se puede agregar el aceite de soja, la malta, los gases (propano y butano) y la urea. Dentro de los petroquímicos, sólo el PVC obtuvo su valor mayor dentro de la serie en el año 2011. El polietileno y los polímeros de etileno lograron su valor mayor en el año 2008, siendo el precio implícito de 2011 el segundo mejor dentro del período de 9 años considerado. Como consecuencia de los incrementos obtenidos en los productos de gran incidencia para la economía local (dentro de los cuales se encuentran los de mayor preponderancia en las exportaciones de Bahía Blanca) la evolución del FOB por tonelada de Bahía Blanca se incrementó de manera interanual en casi un 26%, tal como se mencionara en el primer apartado de la nota.



Fuente: CREEBBA con base en  
INDEC - Aduana.



## 7. Valores importados y participación de Bahía Blanca en el país

La Argentina importó en el 2011 un volumen algo superior a las 38 millones de toneladas por un valor CIF (costo + seguro + flete) de aproximadamente 71 mil millones de dólares. Por su parte, a Bahía Blanca ingresaron importaciones por 2,4 millones de toneladas lo que en términos monetarios significaron casi 1,5 mil millones de dólares CIF. La participación de la aduana bahiense en el total del país pasó de ser, según datos del 2008 y 2011, del 2% al 6% respecto al volumen y del 1% al 2% respecto a valores CIF respectivamente, principalmente por el ingreso de gas natural licuado (GNL), aspecto que se detallará en el siguiente apartado.

Dado el monto CIF pagado por importaciones, los principales orígenes de los bienes importados por Argentina provienen de Brasil, China, Estados Unidos y Alemania, respectivamente. En cambio, para la aduana de Bahía Blanca los principales orígenes de las importaciones son Trinidad y Tobago, y Qatar, países que se asocian a la comercialización de gas.

Respecto a los productos principales, en Bahía Blanca se destaca el GNL participando con el 77% del volumen total ingresado y el 70% del monto total ingresado durante el 2011. Luego se registran ingresos de productos que funcionan como insumo para las empresas del complejo petroquímico de la ciudad. El dato a nivel país registra importantes ingresos de gases y minerales, a lo que se suman las autopartes y vehículos terminados.

## 8. Importación de gases en Argentina y Bahía Blanca

En 2011 la Argentina importó más de 5 millones de toneladas de gas en sus diferentes tipos, pagando en tal concepto unos 2,5 mil millones de dólares CIF. Esto representa casi el 14% del volumen total ingresado por importaciones al país en 2011 y el 3,4% del monto total pagado en concepto de importaciones de ese año. Los gases provienen de 9 países e ingresan a la Argentina por 4 aduanas diferentes. En particular, el gas natural en estado gaseoso ingresa por la aduana de Pocitos desde Bolivia utilizando oleoductos como medio de transporte. Al 2011 esto significó un 41% en términos del volumen total de gases ingresados al país y un 23% respecto del total del monto CIF gastado en concepto de importaciones de gases del país. El CIF implícito sería de unos 261 dólares la tonelada de gas natural en estado gaseoso. El gas licuado de petróleo (GLP) tiene muy baja participación en el ingreso de gases a la Argentina. Proviene de Corea y Perú e ingresa al territorio nacional por las aduanas de Ezeiza y Operativa Capital. Por último, el gas de mayor incidencia en gasto y toneladas importadas por el país es el GNL. Unas 3 millones de toneladas se importaron en 2011 por un costo total de casi 2 mil millones de dólares. Esto representa un 58% en volumen y un 77% en monto al compararlo con la importación total de gases de Argentina. Para el caso del GNL, el CIF por tonelada era de 637 dólares al 2011. El gas natural licuado ingresa al país sólo por dos aduanas: Bahía Blanca y Operativa Capital y proviene de seis países, de los cuales el principal es Trinidad y Tobago, seguido por Qatar y Nigeria respectivamente. El 62% del volumen del GNL importado en 2011 ingresó por Bahía Blanca, mientras que el restante 38% lo hizo por Operativa Capital. Sin embargo, Bahía Blanca relega algo de participación en montos hacia Operativa Capital, dado que el

CIF implícito por tonelada de GNL fue de 585 dólares para Bahía Blanca y de 721 dólares para Operativa Capital. Observando datos para Bahía Blanca en particular, el incremento de toneladas ingresadas de GNL 2011 versus 2009 se incrementó en un 194%. A su vez, el CIF implícito creció en ese período en un 49% pasando de los 394 dólares CIF por tonelada de GNL en 2009 a los 585 dólares CIF por tonelada de GNL en 2011.

## 9. Importación de vehículos en Argentina

Tal como se hiciera mención en el apartado 7, el grupo de importaciones asociadas a vehículos y autopartes representa un costo importante para el país en su conjunto, llegando a los 6,6 mil millones de dólares en 2011. Excluyendo las autopartes y considerando sólo a los vehículos y automotores de todo tipo importados por el país durante el 2011, la participación de los mismos en el monto total CIF importado es de un 9%. Es decir, casi 1 de cada 10 dólares destinados a la importación de bienes se destina a la compra de vehículos en el exterior. El origen de las importaciones de vehículos se encuentra muy concentrado, ya que Brasil representa casi el 70% de las compras de este tipo. Al considerar los primeros 10 países de origen de las importaciones de vehículos y automotores durante el 2011 de un total de 39 naciones, aquellos representan el 98% del monto total CIF pagado en tal concepto. Luego de Brasil se ubican México, Alemania, Corea y Japón, en las primeras posiciones.

## 10. Superávit comercial (monto FOB - monto CIF)

Para la aduana de Bahía Blanca el análisis reviste un interés menor ya que la misma resulta superavitaria al comparar los montos totales FOB y CIF de exportaciones e importaciones respectivamente. Esta aduana registró una diferencia favorable de más de 3 mil millones de dólares en su balanza comercial del 2011. Este monto equivale a decir que solo el 30% de lo exportado desde esa aduana se utiliza para compras en el exterior, quedando libre el restante 70%. Por otra parte, la Argentina presentó en el 2011 un superávit de 10 mil millones de dólares. Relacionado al monto total exportado, sólo quedó para libre disponibilidad un 12% de ese total de envíos al exterior. El 88% de los ingresos generados por ventas al exterior se utilizó para compras en el extranjero. Cabe destacar que la aduana de Bahía Blanca, dadas las cifras del año 2011, participó con un 30% del superávit total registrado en ese año en la Argentina. ■

# Análisis de coyuntura

## Industria, comercio y servicios

La situación general de las empresas bahienses se deterioró en mayo y junio respecto a los meses anteriores. El indicador de saldo de respuesta fue de -3 con un 16% de los encuestados que dijo encontrarse mejor y un 19% que empeoró, es decir que aumentó el número de respuestas negativas respecto al bimestre marzo-abril. Esta caída de actividad suele darse todos los años en este período pero este año fue más pronunciada y generalizada. Para encontrar un saldo de respuesta negativo del indicador hay que remontarse a junio del 2009 o periodos anteriores, aún así la situación puede calificarse como "Normal" según los parámetros del CREEBBA.

A su vez, comparando el saldo de respuesta de la situación general respecto al mismo período del año anterior pudo observarse que ha aumentado el número de encuestados que manifestaron estar peor y no ha variado el de los que se vieron mejor. En este sentido se acentuó la tendencia negativa que viene registrándose en lo que va de 2012 con un indicador que arrojó un saldo de -17, lo que indica un empeoramiento, en términos desestacionalizados, de la economía de los empresarios bahienses.

El indicador que mide el comportamiento de las ventas también ha disminuido notablemente respecto a marzo y abril pasando de +3 a -14 en este bimestre, resultando peor en junio. Los sectores Comercio e Industria han tenido una evolución similar, siendo el Comercio el más afectado (bajó de 13 a -16). En cambio el sector Servicios mejoró

levemente respecto al bimestre anterior. En este sentido, los rubros que impulsaron esta tendencia fueron: Agencias de viajes, Seguros y Transporte de carga. Respecto al sector comercial, hubo algunos rubros que tuvieron un comportamiento estable respecto a meses anteriores y no sintieron el impacto de la retracción en las ventas. Entre ellos se encontraron los siguientes: Vehículos, Farmacias, Alimentos y bebidas y en Indumentaria los negocios dedicados a la venta de ropa masculina producto de las ventas del día del padre. En la Industria, la Imprenta, la Petroquímica y los Frigoríficos fueron los que más disminuyeron su utilización de capacidad productiva en estos dos meses.

Haciendo un análisis del nivel de stocks en las industrias y comercios de la ciudad, 7 de cada 10 de los empresarios consultados comentó que su política es mantener un nivel normal, no excesivo y no incrementarlo dado que significa un costo de capital inmovilizado importante.

En cuanto a los planteles de personal, se mantienen constantes respecto a meses anteriores y sin intención de modificarlos en el corto plazo.

Las expectativas de los empresarios referidas a cada sector en particular para los próximos meses muestran algún grado de pesimismo.

Normalmente las perspectivas para el bimestre julio-agosto mejoran debido a que se suponen aumentos de ventas por el cobro del medio aguinaldo en todos los asalariados, pero este bimestre no se manifestaron optimistas al respecto. Por su parte, las expectativas generales se mostraron coincidentes con meses anteriores,

pesimistas, respecto a la evolución la economía del país y la región.

En resumen, la situación general sigue estando dentro de los parámetros considerados como "Normales", pero en niveles muy bajos de actividad. Las ventas disminuyeron durante el mes de junio más de lo habitual. Se nota una desmejora generalizada en los indicadores económicos en este primer semestre en comparación con 2011 y este panorama lleva a que los empresarios locales se muestren pesimistas para pronósticos a corto y largo plazo.

## Comentarios sectoriales

**Vehículos.** En el mercado de autos 0 Km., según datos de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor (DNRPA), en lo que va del año 2012 se patentaron en el país algo más de 460 mil autos, con más de 146 mil unidades en mayo -junio, mil menos que en el mismo período de 2011, siendo el mes de junio el que marcó la disminución. Comparado con el bimestre anterior las cifras son similares con apenas un 2% más de unidades inscriptas. A nivel local, en el primer semestre de 2012 se patentaron 4 mil unidades, igual cifra que el primer semestre de 2011, con alrededor de 1300 en los meses de mayo y junio, también número similar a las patentadas en el año anterior, es decir que en términos interanuales el sector permanece en niveles constantes respecto del año pasado.

**Textiles e Indumentaria.** La industria textil ha disminuido la utilización de su capacidad productiva como es habitual para este bimestre, pero lo destacable es que no suponen que

aumente para los próximos meses como habitualmente sucede. En los comercios de Indumentaria, solo vieron incrementadas sus ventas aquellos que venden ropa masculina y puntualmente en la semana anterior al día del padre en el mes de junio. En cuanto a la ropa de temporada que pretendían vender en mayo y junio, no fue lo esperado.

#### Agencias de viajes y Turismo.

Los empresarios de este rubro manifestaron haber vendido más viajes al exterior en este bimestre, en especial en mayo y atribuyen este repunte al apuro de algunos turistas a salir del país antes de que se pusieran en marcha las limitaciones a la compra de dólares (aunque en realidad los agentes de viajes afirman que hasta el momento dichas restricciones no influyen en los viajes de argentinos a otros países, ya que se manejan con tarjetas de crédito). Al respecto, un informe de la consultora Abeceb realizado con base en cifras del INDEC referido al tráfico de pasajeros de Ezeiza y Aeroparque, reveló que en lo que va de este año el número de argentinos que viajaron al exterior subió 13,6% respecto a los primeros cuatro meses del año pasado. El mes de abril, último dato del INDEC, marcó que el número de turistas argentinos que salió al exterior creció un 31,2%, lo cual confirma que el comportamiento dado a nivel local coincide con el que se dio a nivel país.

### Mercado inmobiliario

Durante los meses de mayo y junio, se consolidó la caída de actividad en la plaza inmobiliaria bahiense, iniciada a comienzos del año. A diferencia de lo que ocurrió en el bimestre anterior, cuando se corroboró un comportamiento diferencial entre los segmentos de compraventa y alquiler,

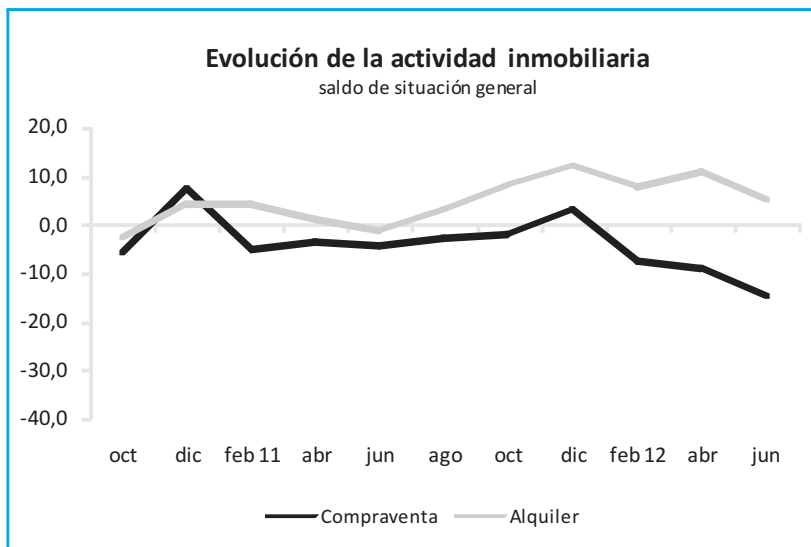
<b>SITUACION GENERAL</b>	<b>Buena</b> 16%	<b>Normal</b> 65%	<b>Mala</b> 19%
<b>TENDENCIA DE VENTAS<sup>1</sup></b>	<b>Mejor</b> 8%	<b>Igual</b> 70%	<b>Peor</b> 22%
<b>SITUACION GENERAL<sup>2</sup></b>	<b>Mejor</b> 7%	<b>Igual</b> 68%	<b>Peor</b> 25%
<b>EXPECTATIVAS SECTORIALES</b>	<b>Alentadoras</b> 3%	<b>Normales</b> 74%	<b>Desalent.</b> 23%
<b>EXPECTATIVAS GENERALES</b>	<b>Alentadoras</b> 1%	<b>Normales</b> 73%	<b>Desalent.</b> 26%
<b>PLANTEL DE PERSONAL<sup>1</sup></b>	<b>Mayor</b> 10%	<b>Igual</b> 84%	<b>Menor</b> 6%

<sup>1</sup>Respecto a marzo-abril - <sup>2</sup>Respecto a igual bimestre de 2011

en el que el primero se derrumbó y el correspondiente a locaciones tuvo una mejora atribuida principalmente a factores estacionales, en esta oportunidad ambos exhibieron una trayectoria negativa. Pese a los descensos en los niveles operados, ambos componentes del mercado inmobiliario se encuentran aún dentro de la franja de situación definida como normal. El subsector de compraventa se halla más próximo a un saldo de demanda regular, escenario que es muy factible en el corto-mediano plazo, dada la continuidad y el agravamiento de las condiciones económicas generales de contexto.

Las perspectivas de los agentes inmobiliarios locales con respecto a la evolución de la situación económica del país en los próximos meses dan cuenta de las impresiones vertidas en el párrafo anterior. En efecto, el 85% de los operadores consultados opina que las condiciones generales empeorarán y el 15% considera que serán mucho peores. El dato relevante es que no se han puesto de manifiesto posturas conservadoras, que indiquen un mantenimiento de la coyuntura actual, ni mucho menos optimistas, que auguren algún tipo de mejora.

El factor fundamental que continúa incidiendo en la paralización de la actividad inmobiliaria es el referido a las restricciones en la compra de dólares, conjuntamente con una importante brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y una cultura orientada al resguardo de los ahorros y las inversiones que se sustancia en la concreción de operaciones únicamente en términos de la divisa norteamericana. Ante las dificultades para materializar la operatoria en dichos términos, el resultado es un retiro de propiedades de la oferta y, a la vez, una menor demanda, no sólo por parte de quienes no están en condiciones de hacerse de los dólares suficientes para adquirir un inmueble, sino también, por parte de aquellos que tienen reservas de dólares y no están dispuestos a desprenderse de ellos a cambio de un bien raíz en el actual contexto de incertidumbre. Sumado a este escenario, la escasez de crédito y las restrictivas condiciones de las pocas líneas ofrecidas, básicamente por la banca pública, como así también la baja capacidad de endeudamiento de los particulares frente a las cotizaciones en plaza, contribuyen a profundizar las dificultades del sector. Ni siquiera el anuncio de los créditos



impulsados por el gobierno con fondos de la ANSES han contribuido a mejorar las expectativas sobre la dinámica sectorial. Conocidas ya las condiciones de los préstamos que van a ofrecerse, queda claro que el alcance de los mismos y su incidencia sobre la performance del mercado inmobiliario resultan muy limitados.

Se estima que la relativa y lenta normalización de la actividad sectorial estaría parcialmente asociada a un cambio de concepto en la forma de la operatoria inmobiliaria. El mismo consistiría en una eventual pesificación del mercado, en la que vendedores y compradores aceptaran concertar transacciones en pesos, a un tipo de cambio intermedio entre el oficial y el paralelo (en la práctica denominado “light blue”). Pero en un sistema dolarizado por años, tan arraigado como es el argentino, este cambio de comportamiento sería muy gradual. No obstante, algunas modalidades de operación se están llevando a cabo en pesos en la actualidad. Se trata de nuevos emprendimientos edilicios, mayormente localizados en la zona de Capital y Gran Buenos Aires, comercializados y financiados en pesos, y de fideicomisos inmobiliarios y de construcción en pesos y al costo, de significativo auge en el presente.

En el análisis desagregado del mercado de compraventa local, cuatro fueron los rubros que impulsaron la caída sectorial: locales, casas, depósitos y pisos-departamentos de 3 y más dormitorios. En todos los casos, el saldo de demanda pasó de normal a regular. Otras categorías concertaron menores volúmenes de ventas pero se mantuvieron en situación normal: terrenos y departamentos de dos dormitorios. Los funcionales y departamentos de un dormitorio replicaron la performance normal del bimestre marzo-abril con iguales niveles de operaciones. Finalmente, las cocheras fueron las únicas que lograron un incremento en la cantidad de compraventas, aunque mantuvieron su indicador de desempeño normal.

Las expectativas de los agentes inmobiliarios locales en lo que al mercado de compraventa respecta no registran precedentes en la encuesta de coyuntura del CREEBBA, ya que el 100% de los consultados consideró que la situación sería peor en los próximos meses.

En el segmento locativo, se produjo una caída de actividad de igual magnitud que la estimada para el mercado de compraventa. No obstante, en términos absolutos, este subsector

se encuentra mejor posicionado, con un saldo de demanda normal positivo y no negativo y tendiendo a regular como se constata en el otro caso. Los rubros que impulsaron la caída del indicador general de los alquileres fueron locales, casas, departamentos de un dormitorio y funcionales, pisos-departamentos de 3 y más dormitorios y depósitos. En el caso de los departamentos chicos, el saldo de demanda pasó de bueno a normal y, en las restantes categorías, la baja ocurrió dentro de un cuadro de situación normal mantenido desde el bimestre anterior. El mejor desempeño correspondió sin dudas a departamentos de dos dormitorios que, no sólo fueron los únicos en lograr mayor número de contratos celebrados, sino que además mejoraron la calificación de su situación de normal a buena.

Las perspectivas de los operadores respecto al desenvolvimiento próximo del segmento de alquileres son algo más alentadoras que las expresadas para el caso de la compraventa, aunque tampoco contienen respuestas que indiquen expectativas de mejoras sustanciales. En definitiva, las respuestas recabadas se hallan polarizadas entre quienes aguardan estabilidad en las condiciones generales (83%) y quienes suponen que habrá un deterioro de las mismas (17%).

## Coyuntura de Punta Alta

En los meses de mayo y junio el indicador de situación general de las empresas puntaltenses reflejó una caída respecto a meses anteriores. El saldo de respuesta pasó de +13 a -9, ubicándose en la categoría “Normal” para los parámetros de medición utilizados por el CREEBBA. Para estos meses del año es usual que se registre



una menor actividad económica en la ciudad pero este año la disminución fue más pronunciada que en 2011 y 2010, notándose niveles similares a los de junio de 2009. Los resultados arrojaron un 13% de los encuestados que dijo encontrarse mejor y un 22% peor que el bimestre marzo-abril.

Comparado con el mismo período del año anterior, se ha incrementado la proporción de empresarios que dice encontrarse peor que hace un año y apenas un 2% se ve en mejores condiciones económicas que el año pasado para esta misma época. El indicador referido a este aspecto pasó de -10 a -35 considerándose así como “Regular”.

Las ventas disminuyeron notablemente respecto de los meses pasados. Apenas un 1% de los consultados registró un aumento y un 34% manifestó haber vendido menos, dando como resultado así un saldo de respuesta calificado como “Regular” ya que bajó de 6 a -33.

Dado este comportamiento de la demanda, la política de stocks aplicada por el 95% de los empresarios es de mantener un nivel necesario de mercadería para el normal funcionamiento de su empresa y uno de cada diez dijo que aumentaría de estar en condiciones financieras de hacerlo.

A propósito de las expectativas de los empresarios, el saldo de respuesta sigue sintiendo la disminución de respuestas optimistas pasando de -6 a -18 lo que indica que los comerciantes divisan un panorama desalentador hacia los próximos meses.

Respecto al plantel de personal, las plantillas se mantuvieron constantes, con algunos casos puntuales de disminución y sin intención de tomar personal por el momento.

En cuanto a patentamientos de

automóviles 0 Km., según datos de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad del Automotor (DNRPA), en el mes de mayo se inscribieron 104 automóviles y en junio 105 lo que totaliza 209 unidades en el bimestre, cifra similar al bimestre pasado y superior a la registrada en el mismo período de 2011, donde se habían patentado 195 unidades en total mostrando así un incremento del 7%

en comparación interanual.

En síntesis, el bimestre de mayo-junio presentó una situación considerada “Normal” pero en niveles muy bajos de actividad a los que se venían registrando en meses anteriores, con ventas menores a las esperadas. Dado este panorama, los comerciantes mostraron un cierto pesimismo para los próximos meses. ■

